

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO: 529
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2022-00479-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: EDICSON RICARDO JIMÉNEZ SALAMANCA
DEMANDADAS: LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO y DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
VINCULADA: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ASUNTO: Resolución excepción previa inepta demanda

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S.A., en su escrito de contestación de la demanda, formularon la excepción previa de “*inepta demanda*”, la cual será resuelta de conformidad con lo reglado en el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con los artículos 100 a 102 del CGP.

Fundó tal excepción en que la demanda incurrió en los defectos de indebida acumulación de pretensiones, en la medida en que solicitó el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la no consignación de la cesantía y la cancelación de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, y de omitir el concepto de violación de conformidad con el numeral 4 del artículo 162 del CPACA y la correspondiente causal de nulidad, con lo cual desconoció el principio de lealtad procesal.

También indicó que la parte actora no determinó con claridad el acto administrativo demandado ni indicó con exactitud ante quien radicó la petición, omisión que impide ejercer a cabalidad el derecho de defensa, pues se desconoce si la petición fue radicada ante el ente territorial, el Ministerio de Educación o el FOMAG.

Sobre la naturaleza de la excepción de inepta demanda, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. William Hernández Gómez, en auto del 29 de septiembre de 2019, Interno No. 4465-17, la explicó en los siguientes términos:

“Ineptitud sustantiva de la demanda – eventos que la constituyen.

(...) se deben realizar algunas precisiones preliminares sobre la denominada «ineptitud sustantiva de la demanda». Al respecto esta subsección ha señalado que con anterioridad se ha hecho alusión a esta figura como si se tratara de una excepción previa o causal de rechazo de la demanda y en últimas, como sustento de decisiones inhibitorias, lo cual constituye una imprecisión¹.

Ello, toda vez que sólo es viable proponer y declarar próspera la excepción previa de «ineptitud de la demanda por la falta de cualquiera de los requisitos formales» o «por la indebida acumulación de pretensiones» y; en relación con otras situaciones, se debe acudir a las demás excepciones previas previstas en el artículo 100 del Código General del Proceso,

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 21 de abril de 2016, Rad. 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).

sin que haya vocación para realizar una denominación en términos diferentes a los señalados por la ley.

Así mismo, se recalcó que al encontrarse otras falencias que otrora han servido como sustento para la declaratoria de una «ineptitud sustantiva de la demanda», en lugar de acudir a esa denominación, se deben utilizar las herramientas que los estatutos procesales prevén para tal efecto, tal como se analizó extensamente en el auto en cita, esto es, aquellos mecanismos de saneamiento como por ejemplo ordenar corregir la demanda o dejar sin efecto el auto admisorio para proceder al rechazo de la misma en atención a la causal legalmente prescrita para el efecto”.

Justamente sobre aquellos requisitos formales a los que hace alusión la jurisprudencia en cita, la misma corporación indicó que éstos corresponden a los señalados en los artículos 162 y 166 del CPACA, inclusive el contenido en el artículo 163 *ibídem*, por lo que el juez de lo contencioso administrativo sólo puede estudiar y declarar probada esta excepción cuando se configure alguno de estos supuestos, pues las demás situaciones que se presenten deben ser examinadas de acuerdo con las otras excepciones previstas en el artículo 100 del CGP (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez, Número Interno 0755-17).

En el presente caso se evidencia que la parte demandante promovió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitó la nulidad del acto administrativo presunto derivado de la petición radicada el 5 de octubre de 2021, que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna del auxilio de cesantía consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago tardío de los intereses sobre las cesantías prevista en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991. Obsérvese:

“Declarar la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 5 DE ENERO DEL 2022 , frente a la petición presentada ante el DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, el día 5 DE OCTUBRE DEL 2021 con radicado NoE2021222681 , mediante la cual se niega el reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021 fecha en que debió efectuarse el pago de las cesantías del año 2020, en el respectivo Fondo Prestacional y hasta el momento en que se acredite el pago de los valores correspondientes en la cuenta individual del docente, así como también niegan el derecho a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, indemnización que es equivalente al valor cancelado de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron cancelados superado el término legal, esto es, después del 31 de enero de 2021.

Declarar que mi representado (a) tiene derecho a que la NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG y la entidad territorial - DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, de manera solidaria, le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99 y a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991. (...)”

Nótese, que en ningún aparte del acápite de pretensiones del libelo se deprecó el pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, como erráticamente lo adujo la parte demandada, ni es acertado que pregone también que en la demanda no se haya indicado la causal de nulidad y el concepto de violación, pues en el respectivo apartado se invocó como tal el desconocimiento o infracción de las normas en las cuales debió fundarse el acto administrativo acusado, se especificaron los preceptos constitucionales y legales quebrantados y se explicó suficientemente el concepto de su trasgresión.

Frente a la precisión del acto administrativo demandado, es evidente que fue satisfecha tal exigencia, ya que fue debidamente individualizado; cuestión distinta es que haya sido o no acreditado, pues su demostración será objeto del debate probatorio.

Por consiguiente, no son plausibles los argumentos planteados en la excepción previa por parte del Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la Fiduprevisora S.A, toda vez que lo pretendido es la nulidad de un acto administrativo ficto derivado del silencio de la entidad demandada a quien el ente territorial le reenvió la reclamación administrativa, pues mediante Oficio S-2021-322108 del 11 de octubre de 2021 la Secretaría de Educación de Bogotá la remitió a la Fiduprevisora S.A. y la parte pasiva no acreditó que hubiera expedido y notificado el acto administrativo definitivo que le permitiera a la administrada acudir a la jurisdicción y, en consecuencia, al no existir respuesta de fondo es dable que la demandante acuda a este medio de control judicial para impugnar el acto presunto negativo.

Así las cosas, se desestimaré el medio exceptivo planteado, en atención a que la parte actora expresó con precisión y claridad las pretensiones de la demanda e individualizó el acto ficto acusado, es decir, aquel mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1. DECLARAR infundada la excepción previa de “*Inepta demanda*” formulada por La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S.A.
2. REINGRESAR el expediente al despacho, una vez ejecutoriado el presente proveído.
3. RECONOCER a la Dra. Catalina Celemin Cardoso, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.110.453.991 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 201409 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, y a la Dra. Liseth Viviana Guerra González, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.012.433.345 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 309444 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderadas principal y sustituta de La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la Fiduprevisora S.A., en los términos y para los fines conferidos en los poderes general y especial y de acuerdo con los anexos obrantes en los folios 29 a 31 y 35 a 56 del archivo “*10ContestacionDemandaAnexos.pdf*” del expediente digital.
4. RECONOCER a la sociedad Chaustre Abogados S.A.S., representada legalmente por el Dr. Pedro Antonio Chaustre Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.589.807 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 101271 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, y al Dr. Andrés David Muñoz Cruz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.233.694 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 393775 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura como apoderados principal y sustituto del Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación, en los términos y para los fines conferidos en el poder y de acuerdo con los anexos obrantes en el archivo “*12SustitucionPoder.pdf*” del expediente digital.

Los memoriales de los apoderados deben ser enviados únicamente al correo electrónico correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, los cuales deberán contener los 23 dígitos de proceso, el juzgado al cual se dirige, las partes del proceso y no podrá exceder 5000 KB.

La presente providencia será notificada en estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 180-1 y 201 del CPACA, el cual podrá ser consultado en el portal de internet de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

KPG

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7d5258369a45c2ef36b4ea14ba58490100409f049065abad07ed3b8d136a8232**

Documento generado en 08/08/2023 09:19:00 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>